

# **Bolivia: de la recuperación democrática de 1982 a la agonía de los partidos y el nuevo protagonismo de las FF.AA.**

**Miguel Urioste F. de C.\***

\* *Director  
de Fundación TIERRA,  
La Paz.*

---

No es posible entender la profunda reconfiguración de las hegemonías políticas y territoriales en Bolivia sin remontarnos al inicio del proceso democrático en 1982. Desde entonces Bolivia vive el más largo período de su historia en democracia –veintidós años– con la alternación de partidos sistémicos en el gobierno, cada cuatro años. Es la etapa de mayores libertades políticas conocida en la era republicana. En efecto, el ciclo democrático iniciado en octubre de 1982 abrió un abanico de posibilidades para la construcción de ciudadanía durante las dos décadas posteriores. A partir de ese momento la sociedad civil organizada, sindicatos, gremios y corporaciones, pero especialmente los partidos políticos y los medios de comunicación, jugaron un papel determinante.

En los últimos años estos partidos políticos expropiaron la representación ciudadana, se embarraron en la corrupción y la prebenda como forma sistemática de asalto al erario público, y envilecieron a extremos insospechados el ejer-

cicio del servidor público. A su vez, la gran mayoría de los medios de comunicación, especialmente los canales de radio y televisión, hacen ahora abuso extremo de la libertad de información, manipulan y desorientan a la opinión pública, y han perdido el menor sentido de responsabilidad y de ética periodística. Se han convertido en actores sociales y políticos protagónicos sin ningún control ciudadano. Todo vale con tal de ganar en índices de audiencia.

A pesar de este papel monopólico y excluyente de la mayoría de los partidos, este proceso de construcción de ciudadanía tuvo una dinámica ascendente, signada por hitos fundamentales que es necesario destacar.

El primero de ellos fue el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) del presidente Siles Zuazo, que tuvo la lucidez de jamás utilizar la fuerza pública para reprimir a los emergentes movimientos sociales de entonces. Paradójicamente el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Lechín Oquendo, enemigo personal de Hernán Siles Zuazo, condujo a los trabajadores de la entonces poderosa central obrera a un grado extremo de polarización con reivindicaciones laborales imposibles de atender. Las dictaduras anteriores habían dejado al erario nacional en bancarrota y la inflación monetaria fue incubada en gastos dispendiosos, particularmente durante el atrabiliario gobierno del dictador García Meza (1980-1981). Estas acciones de los movimientos sociales radicalizados le hacían coro a los sectores más conservadores de la sociedad boliviana, representados en ese momento por la amplia mayoría parlamentaria de que gozaban el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estensoro y la Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Bánzer Suárez.

Otro aspecto necesario de recordar al inicio del proceso democrático es el proceso judicial iniciado contra el ex presidente de facto Luis García Meza por un reducido grupo de abogados dirigidos por el diputado Juan Del Granado, actualmente alcalde de la ciudad de La Paz, que concluyó con una sentencia histórica: treinta años de cárcel para el dictador, sin derecho a indulto, convirtiéndose en un caso inédito en toda la historia latinoamericana. García Meza es el único presidente de facto, ex general de la República, que guarda detención en un penal de alta seguridad por el resto de sus días.

La hiperinflación de 8.000% del año 1985 se tragó al régimen de la UDP un año antes de la finalización de su mandato y abrió las puertas para que la ciudadanía en general aceptara el programa de ajuste estructural y estabilización monetaria que implantó el gobierno de Víctor Paz Estensoro en agosto de 1985. En esa oportunidad entró en escena una disposición legal emblemática —el Decreto Supremo 21060— que resume el ocaso de una economía hasta entonces mayoritariamente estatal y basada en las empresas públicas, implantando la ortodoxia neoliberal. El principal efecto de esta dis-

**“Hoy prácticamente un tercio de los representantes nacionales en el Congreso Nacional –por primera vez en la historia republicana– son indígenas. Su digna presencia es una afrenta a los tradicionales partidos sistémicos y a las oligarquías mestizas...”**

posición en el plano monetario fue inmediato: la inflación se paró en seco y desde entonces la paridad del cambio del peso boliviano con el dólar ha ido subiendo muy lentamente hasta alcanzar, diecinueve años después, una relación de ocho bolivianos por dólar. Paradójicamente el peso boliviano es una de las monedas más sólidas y estables de la región, en uno de los países más pobres y atrasados del mundo.

En 1982, cuando se inicia el gobierno de la UDP, la proporción de ayuda externa a Bolivia era prácticamente nula. Sin embargo, a partir de la estabilización monetaria de 1985 en adelante, se produjo un incremento notable de inyección de recursos financieros que han llegado a más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 8.000 millones de dólares. Cada año cerca de 800 millones de dólares son otorgados concesionalmente en préstamos a muy largo plazo o en forma de donaciones para mantener con vida el *milagro boliviano*. Entretanto, se fueron creando múltiples fondos de inversión social, generación de empleo eventual, inversión en infraestructura educativa y de salud, y algunos servicios básicos que definitivamente han cambiado las condiciones materiales de muchos servicios públicos. Sin embargo, los gastos corrientes para el funcionamiento de estos servicios jamás pudieron alcanzar los niveles requeridos para garantizar recursos frescos provenientes del Tesoro General de la Nación. Es muy fácil encontrar bellas escuelas en los más recónditos lugares del país sin maestros o con muy pocos alumnos, a pesar de la fuerza de la interculturalidad de la reforma educativa iniciada en 1994, que va de la mano con la modificación de la Constitución Política del Estado, que define a Bolivia como país multiétnico y pluricultural.

Como resultado del éxito de la *estabilización monetaria* lograda con la aplicación del famoso decreto 21060, Bolivia fue escogida por la comunidad internacional como el modelo exitoso que había que acompañar, fortalecer y consolidar. Los organismos multilaterales como el BM y el FMI, así como la cooperación bilateral, apostaron por

Bolivia; y enjambres de consultores, asesores, expertos y cooperantes prácticamente invadieron el país y en algunos casos suplantaron funciones públicas. Comenzó así un periodo de *africanización* del estilo de las relaciones de cooperación ante un Estado boliviano débil, desmantelado, sin instituciones públicas propias, y cooptado cada cuatro años por los partidos políticos.

La acelerada expulsión migratoria del campo hacia las ciudades, directamente estimulada por la total apertura a las importaciones en general, pero particularmente a las de productos agrícolas y alimentos tradicionalmente producidos por las poblaciones indígenas y campesinas del mundo rural, es la demostración más palpable de que esta apertura comercial liquidó cualquier posibilidad de desarrollo en el ámbito agropecuario-rural.

Por eso es que tanto los informes sobre desarrollo humano elaborados periódicamente por el PNUD así como diferentes estudios y diagnósticos del BM coinciden en señalar que la extrema pobreza se ha concentrado dramáticamente en las áreas rurales, pero especialmente en aquellas más alejadas y distantes de las ciudades intermedias y centros urbanos. Más del 90% de la población rural indígena de Bolivia vive en condiciones de extrema pobreza y ha desarrollado estrategias de supervivencia que combinan múltiples iniciativas para generar empleo temporal y complementar los ingresos familiares, mediante el comercio, la producción artesanal, pero especialmente mediante la venta de su fuerza de trabajo fuera de su lugar de origen. Se calcula oficialmente que sólo en la República Argentina viven más de un millón de ciudadanos bolivianos.

Muchos campesinos-indígenas de tierras altas abandonan sus comunidades de origen para trabajar sin ninguna garantía laboral y con jornales que fluctúan entre dos o tres dólares al día. Por eso es que la precariedad de las economías campesinas del occidente andino está provocando incesantes flujos migratorios hacia las tierras bajas de los llanos y la Amazonía, regiones que confrontan una enorme presión por el acceso y control de los recursos naturales, especialmente la tierra y el bosque. El conflicto por el acceso a la tierra es ahora uno de los principales elementos de confrontación social entre movimientos de indígenas y campesinos sin tierra, y grandes propietarios de tierras no trabajadas en los llanos.

La reforma agraria de 1953 eliminó definitivamente el régimen de servidumbre y devolvió la tierra a sus legítimos dueños, los indígenas y campesinos del altiplano y los valles. No obstante, esa misma reforma agraria construyó una estructura de propiedad y de producción de corte dual: minifundio en el occidente andino y latifundio en los llanos orientales. La gran mayoría de las tierras de los llanos de Bolivia fueron otorgadas en propiedad mediante dotaciones gratuitas a los simpatizantes del régimen de turno o como

pago por sustentar los regímenes de facto, especialmente durante la dictadura del General Hugo Bánzer entre 1971 y 1978, quien distribuyó gratuitamente cerca de 12 millones de hectáreas en los llanos de Bolivia. En las tierras bajas, El Chaco y la Amazonía boliviana, el conflicto por el acceso a la tierra está atravesando fuertes tensiones resultantes de dos procesos contradictorios.

Por un lado, la ciudad y el departamento de Santa Cruz se han convertido en el centro hegemónico del poder económico sustentado básicamente en torno a la expansión de los cultivos de soja y el crecimiento de la ganadería, y en menor medida los cultivos de algodón y caña de azúcar. Ahora, además, Santa Cruz es depositaria de importantes campos de reserva de gas natural. Es sin duda la región más pujante del país que atrae mano de obra y posibilidades de empleo, pero es allí justamente donde los pueblos indígenas originarios de esas tierras, bajo el amparo de la Ley de Tierras aprobada en el año 1996 (Ley INRA), avanzan lenta pero sostenidamente en la conquista de la titulación de vastos territorios indígenas de propiedad colectiva. Por otra parte, y al mismo tiempo, campesinos-indígenas provenientes de las alturas de occidente literalmente se descuelgan de las montañas y se asientan en cualquier pedazo de tierra que encuentren disponible. Pero esas tierras tienen dueños o por lo menos gente que se atribuye la propiedad con documentos otorgados por el Estado de manera poco clara. Esas tierras constituyen la base patrimonial fundamental de la fortalecida y creciente burguesía regional del oriente. En los hechos, de manera sorda y solapada, hay en esta región una guerra subterránea por el acceso a la tierra y a los bosques que enfrenta –casi irreconciliablemente– a los grandes propietarios, muchos de ellos sólo especuladores y traficantes de tierras, con indígenas orientales y amazónicos por un lado, y migraciones de colonizadores collas de la región andina por el otro.

Los emergentes movimientos indígenas de Bolivia encontraron un poderoso instrumento de fortalecimiento de su identidad étnica territorial y de reconstitución de sus formas de poder local a partir de la aprobación de la Ley de Participación Popular (1994). Esa medida, la descentralización municipalista con pleno reconocimiento jurídico de las autoridades originarias y de las circunscripciones territoriales de sus comunidades, ha despertado un poderoso sentimiento de pertenencia, autogobierno y apropiación indígena de la institucionalidad pública local.

En efecto, de los 318 municipios que existen en Bolivia, 280 son estrictamente rurales y están gobernados mayoritariamente por alcaldes y concejales de origen indígena-campesino. El reciente surgimiento de los liderazgos de Evo Morales en torno al Movimiento al Socialismo (MAS) y de Felipe Quispe con el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) es un efecto directo de la conquista del poder estatal local por parte de la sociedad rural organizada a través de la aplicación de la Ley de Participación Popular. Hoy prácticamente

un tercio de los representantes nacionales en el Congreso Nacional –por primera vez en la historia republicana– son indígenas. Su digna presencia es una afrenta a los tradicionales partidos sistémicos y a las oligarquías mestizas que hasta hace poco han venido controlando hegemónicamente el poder político y económico. Personajes quebrados, intolerantes y racistas que acceden al parlamento en las listas de los partidos sistémicos, como tabla de salvación, están obligados ahora a compartir, discutir y convivir con campesinos-indígenas que por primera vez acceden directamente a la función legislativa.

Desde hace casi un lustro, simultáneamente al proceso de Participación Popular Municipal (1994) y la aplicación de la nueva Ley de Tierras (Ley INRA de 1996), ha surgido en el mundo rural boliviano una fuerte demanda de apropiación plena de los recursos naturales. Si en el siglo XIX fue la plata de Potosí y en el siglo XX el estaño, es claro que en el siglo XXI la forma del aprovechamiento de los hidrocarburos, especialmente del gas, reconfigurará todo el escenario político, social y económico boliviano. Los nuevos pozos de exploración están justamente en medio de los territorios indígenas reconocidos por la nueva Ley de Tierras. Ellos apelan al cumplimiento de las disposiciones del convenio 169 de la OIT para ejercer plenamente su derecho a ser consultados en el aprovechamiento de los recursos naturales. No están dispuestos a que ocurra lo que ya pasó con la plata y el estaño.

Tomando en cuenta todos los antecedentes anteriores, el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 fue el resultado de un conjunto de factores entre los cuales se pueden resumir los siguientes:

1. La enorme fragilidad –pero especialmente ilegitimidad– de las alianzas parlamentarias entre el MNR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz y Nueva Fuerza Republicana (NFR) del ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que dieron lugar a la constitución de ese gobierno con una arrolladora mayo-

***“Si en el siglo XIX fue la plata de Potosí y en el siglo XX el estaño, es claro que en el siglo XXI la forma del aprovechamiento de los hidrocarburos, especialmente del gas, reconfigurará todo el escenario político, social y económico boliviano”***

ría congresal pero únicamente en términos estrictamente aritméticos. Quienes hasta pocas horas antes se habían agredido sistemáticamente, llegando muchas veces al extremo del insulto personalizado durante la campaña electoral previa, aparecieron cogobernando en una obscena repartija de cargos públicos y del cuoteo prebendal de la administración estatal.

2. La persistencia de una profunda recesión económica como resultado de las crisis anteriores de las economías brasileña y argentina. La devaluación del Real en 1988 generó condiciones muy adversas para las exportaciones bolivianas a ese país. La tasa de desempleo abierto en Bolivia bordea ahora el 14% de la población económicamente activa (PEA), seguramente una de las más altas de la historia boliviana. No hay trabajo. No solamente son campesinos-indígenas o ex obreros los que deambulan por las calles en búsqueda de cualquier fuente de ingreso, sino inclusive amplios sectores de las clases medias profesionales sufren como nunca una disminución absoluta en sus niveles de ingreso y bienestar económico.

3. La negativa percepción ciudadana, especialmente de la enorme ciudad indígena-campesina que es El Alto, respecto de los acuerdos no transparentes de las administraciones de Bánzer, Quiroga y Sánchez de Lozada para exportar el recientemente descubierto gas natural en los *mega campos* de la región de El Chaco, a través de puerros chilenos; la consigna anti chilena, inculcada en las escuelas desde la derrota de la Guerra del Pacífico en 1879; los conflictos por el aprovechamiento de un manantial de agua potable que nace en territorio boliviano (el manantial del Silala), que por medios artificiales ha sido desviado y llega sin pago alguno hasta la ciudad de Arica; la persistencia chilena en mantener sus fronteras con Bolivia con más de medio millón de minas antipersona, violentando todos los tratados internacionales; pero sobre todo la consigna de industrializar el gas antes de exportarlo, cohesionaron fuertemente a los movimientos sociales populares. La respuesta gubernamental al alzamiento popular de octubre tuvo como resultado una cruenta masacre de cincuenta y nueve ciudadanos. El uso indiscriminado de la fuerza pública determinó el derrocamiento de Sánchez de Lozada.

Desde entonces han transcurrido seis meses y medio, y el presidente Carlos Mesa –quien ascendió al cargo por mandato constitucional– ha logrado hasta ahora un frágil ambiente de tolerancia y relativa paz social. Su gobierno no tiene un solo representante en el parlamento, la estructura del poder ejecutivo no se sustenta en ningún partido político y no ha podido afectar ninguno de los *cupos de los partidos* del anterior régimen que acaparan la administración pública. El gobierno tiene el muy difícil mandato de llevar adelante un referéndum vinculante sobre las exportaciones de gas, aprobar una nueva ley de hidrocarburos, conducir las elecciones municipales del mes de

diciembre y promover la instalación de una Asamblea Constituyente para el año 2005, así como reducir el déficit fiscal del 9%, generar fuentes de empleo y reactivar la economía nacional.

En medio de todo este complejo escenario juega un papel destacado la persistente exigencia de la embajada de Estados Unidos para continuar con la erradicación forzosa de los cultivos de la hoja de coca. Este es un aspecto altamente sensible, especialmente para la población indígena que vive de este cultivo en las regiones del Chapare en Cochabamba y de los Yungas en La Paz. Si bien la superficie de los cultivos de hoja de coca ha disminuido dramáticamente en los últimos años –se estima que ahora no existen más de 20.000 hectáreas cultivadas con coca, de las cuales 12.000 son legales de acuerdo a disposiciones vigentes–, las presiones norteamericanas para el uso de la fuerza pública y la represión de los cultivadores de la hoja de coca constituyen una de las principales amenazas a la estabilidad del gobierno del presidente Mesa y de la propia democracia boliviana. Para Estados Unidos y las elites tradicionales de Bolivia es simplemente imposible admitir que un indígena, ex dirigente cocalero, ahora líder de amplios sectores nacionales –Evo Morales– logre importantes avances electorales en los comicios municipales de diciembre de este año y se proyecte como posible ganador de las futuras elecciones presidenciales del año 2007.

A su vez, las empresas petroleras que realizaron fuertes inversiones en la exploración de los hidrocarburos a partir de las normas legales de capitalización que impulsó el gobierno de Sánchez de Lozada en su primer período (1993-1997) ejercen ahora enormes presiones para mantener sus expectativas de ganancia a partir de la venta directa de Gas Natural Licuado (GNL) a mercados internacionales. Bolivia tiene ahora más de 46,8 TCF (trillones de pies cúbicos de gas, por sus siglas en inglés) como reservas certificadas, y es probable que esta cifra pueda fácilmente duplicarse si se continúan las exploraciones. En los hechos Bolivia se ha convertido de la noche a la mañana en la principal potencia gasífera del continente y es ahora punto central de atención de los países vecinos, empresas transnacionales y mercados de ultramar, especialmente de California y México, ávidos de energía pura y barata.

La consigna de los sectores populares en octubre de 2003 era *no a la exportación del gas por puertos chilenos*; en seis meses esa consigna ha cambiado y hoy el elemento nucleador de las protestas sociales de mayo de 2004 es la *nacionalización del gas*.

Bolivia ha nacionalizado los hidrocarburos en dos momentos particulares del siglo XX: en 1937 los campos de la Standard Oil y en 1969 los de la Bolivian Gulf Company, con las correspondientes indemnizaciones por expropiación. Pero en esas oportunidades –pese a que los oleoductos ya estaban tendidos y los mercados asegurados– los mon-

tos a indemnizar eran pequeños. Hoy la situación es completamente distinta. Si Bolivia quisiera nacionalizar el gas, utilizarlo y aprovecharlo por sí sólo, necesitaría cuando menos de 5 mil millones de dólares para hacer que esa expropiación rinda frutos económicos dentro de unos cuatro años. Por un lado habría que indemnizar a las empresas extranjeras por inversiones que fluctúan alrededor de los 3 mil millones de dólares –sin contar con sus expectativas de ganancias futuras– y además invertir otros 2 mil millones de dólares para la instalación de ductos, plantas de bombeo y estaciones de licuefacción del gas para su exportación. Y todo esto aún sin tomar en cuenta las cuantiosas inversiones que se requerirían para su aprovechamiento industrial. Esos 5 mil millones de dólares equivalen a más del 60% del PIB. En consecuencia, técnica y financieramente la nacionalización del gas –como se hizo en los períodos anteriores– ahora no es posible.

El gobierno del presidente Mesa acaba de presentar al Congreso un proyecto de Ley de Hidrocarburos que vuelve a crear la empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y sin consulta previa con las empresas petroleras eleva progresivamente los impuestos hasta un 50%. Obviamente las empresas transnacionales rechazan ese incremento y amenazan con paralizar sus operaciones e impugnar ante tribunales internacionales. Sin embargo, los movimientos sociales más radicales exigen la nacionalización inmediata y sin indemnización a las empresas extranjeras, lo que significaría el aislamiento absoluto de Bolivia en el contexto internacional.

Movimientos sociales radicalizados lanzaron, a fines de abril, la consigna de huelga general indefinida y bloqueo de caminos en todo el país. Esa es la consabida consigna para derrocar un gobierno. A la fecha en que se escribe este breve ensayo (10 de mayo de 2004), sólo sectores aislados pero muy bien organizados bajo el control de movimientos de la izquierda más radical como el magisterio, algunas universidades y sectores de mineros, exigen al presidente Mesa la nacionalización del gas o su renuncia. Esta consigna de sectores minoritarios pero muy activos está sustentada por análisis superficiales elaborados por instituciones no especializadas en el tema que desacreditan el proyecto de ley del gobierno al que califican de continuismo del anterior.

El viernes 7 de mayo, el Tribunal Constitucional falló a favor de los familiares de los damnificados en las revueltas del Motín Policial de febrero de 2003 y estableció que los militares involucrados en las muertes de civiles deben ser juzgados en la justicia ordinaria y no en el Tribunal Militar. La respuesta del Alto Mando Militar ha sido el desacato al fallo del Tribunal Constitucional y por primera vez en veintidós años de democracia han hecho público un pronunciamiento de corte eminentemente político. Luego de veintidós años de vida estrictamente institucional, las FF.AA. se han convertido en el actor político central que definirá el futuro del proceso democrático.

De esa manera, al igual que en el año 1985, sectores de la vanguardia social le están haciendo ahora el juego a la embajada norteamericana, a las empresas petroleras y a los sectores más conservadores de terratenientes del oriente. Estos sectores de poder ya han expresado que el gas se debe exportar cuanto antes y por cualquier puerto, rechazan la convocatoria al referéndum vinculante y se enfrentan abiertamente a la realización de la futura Asamblea Constituyente. El gobierno del presidente Carlos Mesa rompió el equilibrio que había logrado mantener durante medio año, hasta el mes de abril pasado, y optó por conformar un nuevo gabinete que incorpora a destacados profesionales comprometidos con una visión humanista, de equidad social y económica, y pro indígena. Convocó al referéndum sobre el gas mediante Decreto Supremo, ante el sistemático boicot de los partidos que dominan el Congreso y que hasta el cierre de este ensayo aún se resisten a aprobar la Ley de Convocatoria al Referéndum. El gobierno del presidente Mesa ha hecho un giro leve hacia la izquierda. El dirigente Evo Morales llama a la cordura y a la preservación del régimen democrático.

Mientras tanto ha comenzado a surgir de forma tímida, dispersa y sin liderazgo visible, una corriente ciudadana que pretende movilizarse en búsqueda de conservar escenarios democráticos de ejercicio pleno de la ciudadanía en términos del respeto a la ley, la democracia, la convivencia ciudadana y la justicia social. No se sabe aún si este movimiento logrará traducir en apoyo político la enorme simpatía ciudadana del 70% que aún concentra el presidente Carlos Mesa.

Las relaciones entre Chile y Bolivia han llegado a un nivel muy grande de deterioro y la campaña electoral presidencial chilena está incluyendo por primera vez en su historia el debate sobre la demanda marítima de Bolivia y sus requerimientos energéticos para atender su creciente actividad productiva e industrial. Aparentemente el presidente Lagos ha tomado ya la decisión de no depender del aprovisionamiento de gas de ninguno de los países vecinos, incluida la Argentina. Chile estaría dispuesto a comprar gas proveniente de países asiáticos pagando tres veces más el precio que podría negociar con Bolivia o Argentina.

Los reclamos sociales son estrictamente sectoriales y puntuales, en un ambiente de generalizado desacato a la autoridad y a las normas vigentes. No solamente están fragmentados los movimientos sociales, sino también el Estado, sus instituciones y sus operadores. Desde hace muchos años, desde esferas gubernamentales, se ha acostumbrado a los movimientos sociales a que la única manera de obtener *conquistas sociales* es a través de la presión.

Sólo existen dos proyectos políticos que podrían ser calificados como portadores de visión de Estado y de sociedad. Por un lado, el autodenominado movimiento *nación*

*Camba* (o de la media luna porque incluye a todos los departamentos y provincias no andinas) que aglutina a sectores del oriente y Chaco boliviano; y, por el otro, la propuesta de reconstitución aymara del Collasuyo en el altiplano paceño. Ambas propuestas que pueden conceptualizarse como nacionalistas, racistas y conservadoras, se basan en la exclusión y en el rechazo y la negación del *otro*, del distinto. Ninguno de estos dos movimientos quiere ni el referéndum sobre el gas el 18 de julio próximo ni la realización de la Asamblea Constituyente el próximo año. Estas propuestas radicalizan los comportamientos de la sociedad boliviana hacia grados aún mayores de intolerancia.

Mayo de 2004 será un mes de definiciones que marcarán el nuevo rumbo de la historia boliviana. Si el gobierno del presidente Carlos Mesa es derrotado por la acción combinada de fuerzas de la izquierda más radical que finalmente pueden acabar coincidiendo con los intereses de las empresas petroleras, la embajada americana y los grupos tradicionales de poder, seguramente Bolivia ingresará en una fase de mayor inestabilidad política, desajustes sociales y confrontaciones regionales que, sin duda, afectarán al conjunto de los países vecinos.